

**16740** *ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 44.430, interpuesto contra este Departamento por don Nicasio López Torres («Panificadora Santa Rita»).*

Ilmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 22 de marzo de 1985 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 44.430, promovido por don Nicasio López Torres («Panificadora Santa Rita»), sobre sanción de multa por infracción a la Disciplina del Mercado, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Estimamos el recurso número 44.430, interpuesto contra Resolución del Subsecretario para el Consumo de fecha 9 de junio de 1982, cuyo acuerdo anulamos y dejamos sin efecto por su no conformidad a derecho, así como la sanción que fue impuesta a don Nicasio López Torres («Panificadora Santa Rita»); sin mención sobre costas.»

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso por la Abogacía del Estado recurso de apelación, el cual ha sido admitido en un solo efecto.

Lo que comunico a VV. II.  
Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Servicios, Fernando Magro Fernández.

Ilmos. Sres. Secretario general para el Consumo y Director general de Inspección del Consumo

**16741** *ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 43.317, interpuesto contra este Departamento por la Compañía mercantil «Dietéticos Ulta, Sociedad Anónima».*

Ilmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 28 de octubre de 1983 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 43.317, promovido por la Compañía mercantil «Dietéticos Ulta, Sociedad Anónima», sobre sanción de multa por infracción cometida en materia sanitaria, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Compañía mercantil «Dietéticos Ulta, Sociedad Anónima», contra la Resolución de la Dirección General de Salud Pública de veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, así como frente a la también Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y dos, esta última desestimatoria del recurso de alzada contra la primera formulado, a que las presente actuaciones se contraen, debemos:

Anular y anulamos tales Resoluciones por su disconformidad a derecho, dejando sin efecto la sanción por ellas impuestas; con las inherentes consecuencias legales y singularmente la de devolución a la recurrente del importe de dicha sanción.

Sin hacer expresa imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. II.  
Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Servicios, Fernando Magro Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Salud Pública.

**16742** *ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 44.431, interpuesto contra este Departamento por don Nicasio López Torres («Panificadora Santa Rita»).*

Ilmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 9 de marzo de 1985 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional

en el recurso contencioso-administrativo número 44.431, promovido por don Nicasio López Torres («Panificadora Santa Rita»), sobre sanción de multa por infracción cometida en materia de Disciplina de Mercado, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Estimamos el recurso número 44.431, interpuesto contra la Resolución del Subsecretario para el Consumo de fecha 26 de noviembre de 1982 y contra Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de diciembre de 1983, cuyos acuerdos anulamos y dejamos sin efecto por su disconformidad a derecho, decretando en su lugar la caducidad del procedimiento sacionador con archivo de las actuaciones; sin mención sobre costas.»

Lo que comunico a VV. II.  
Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Servicios, Fernando Magro Fernández.

Ilmos. Sres. Secretario general para el Consumo y Director general de Inspección del Consumo.

**16743** *ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 43.763, interpuesto contra este Departamento por «Ferreira, Sociedad Limitada».*

Ilmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 25 de marzo de 1985 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 43.763, promovido por «Ferreira, Sociedad Limitada», sobre resarcimiento de daños, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Navarro Gutiérrez, en nombre y representación de «Ferreira, Sociedad Limitada», contra las Resoluciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 27 de enero de 1983 y 31 de diciembre de 1981, y a que estas actuaciones se contraen, y cuyos acuerdos, por no ser conformes a derecho, debemos anular y anulamos, declarando en su lugar que el actor deberá ser indemnizado en la cantidad fijada por la pericia judicial con las deducciones que los peritos fijaron a las facturas 12.231 y 12.532; se desestima la demanda en todo lo demás y no se hace expresa imposición de las costas causadas.»

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso por la Abogacía del Estado recurso de apelación, el cual ha sido admitido en un solo efecto.

Lo que comunico a VV. II.  
Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Servicios, Fernando Magro Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

**16744** *ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 515.589, interpuesto contra este Departamento por don Manuel Sánchez Ruiz.*

Ilmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 28 de febrero de 1985 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 515.589, promovido por don Manuel Sánchez Ruiz sobre sanciones disciplinarias, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Sánchez Ruiz contra la Resolución del entonces Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y contra la Orden del Ministerio de la Presidencia de treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y uno, que publica el acuerdo del Consejo de Ministros de diecinueve de junio del mismo año, separando del servicio al recurrente, debemos declarar y declaramos:

Primero.-La nulidad de la Orden del Ministerio de la Presidencia de treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y uno, por no ser conforme con el ordenamiento jurídico en cuanto sancionó al recurrente con la separación del servicio, y en su lugar acordamos que la sanción procedente es la de dos años de suspensión de funciones.

Segundo.-Que la Resolución del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta, que impuso al recurrente tres sanciones de suspensión de funciones, dos de ellas de dos años cada una y la tercera de cuatro años, es ajustada a derecho y por ello la confirmamos.

Tercero.-Desestimamos las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto.-No se hace expresa condena de costas.»

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Servicios, Fernando Magro Fernández.

Ilmos. Sr. Subsecretario y Director general de Servicios.

**16745** *ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 43.927, interpuesto contra este Departamento por doña Isabel Aguilar Solano.*

Ilmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 15 de marzo de 1985 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 43.927, promovido por doña Isabel Aguilar Solano sobre sanciones económicas impuestas a la recurrente en virtud de expediente disciplinario, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Estimamos el recurso número 43.927, interpuesto contra resolución del Ministro de Sanidad y Consumo de 17 de marzo de 1983, debiendo revocar como revocamos el mencionado acuerdo por su disconformidad a derecho, y anulamos la sanción que se imponía a doña Isabel Aguilar Solano, sin mención sobre costas.»

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Servicios, Fernando Magro Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Farmacia y Productos Sanitarios.

**16746** *ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 512.704, interpuesto contra este Departamento por doña Ana María Jesús Echevarría Arizmendi y otros.*

Ilmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 24 de abril de 1984 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 512.704, promovido por doña Ana María Jesús Echevarría Arizmendi y otros sobre impugnación de las nóminas de haberes correspondientes al mes de junio de 1981, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor.

«Fallamos Que desestimamos el recurso interpuesto por doña Ana María Jesús Echevarría Arizmendi y demás que se mencionan en el encabezamiento de esta sentencia contra las nóminas de sus haberes del mes de junio de 1981 y contra la desestimación presunta por silencio del recurso de reposición interpuesto ante el Consejo de Ministros en 9 de julio de 1981, acto que declaramos conformes al ordenamiento jurídico, sin costas.»

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Servicios, Fernando Magro Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.

**16747** *ORDEN de 31 de mayo de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 44.461, interpuesto contra este Departamento por don Manuel Santos Peña.*

Ilmos. Sres.: De Orden del excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha de 30 de marzo de 1985 por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 44.461, promovido por don Manuel Santos Peña, sobre sanción de multa por infracción a la Disciplina del Mercado, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Estimamos el recurso número 44.461, interpuesto contra Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo de 20 de diciembre de 1983, debemos anular, como anulamos, el mencionado acuerdo, y en su lugar decretamos la caducidad del expediente con archivo de las actuaciones, dejando sin efecto la sanción en su día impuesta; sin mención sobre costas.»

Asimismo se certifica que contra la referida sentencia se interpuso por la Abogacía del Estado recurso de apelación, el cual ha sido admitido en un solo efecto.

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 31 de mayo de 1985.-P. D., el Director general de Servicios, Fernando Magro Fernández.

Ilmos. Sres. Secretario general para el Consumo y Director general de Inspección del Consumo.

**16748** *ORDEN de 19 de junio de 1985 por la que se autoriza a la Clínica Puerta de Hierro, de Madrid, a efectuar trasplantes de corazón y corazón-pulmón.*

Ilmo. Sr.: Don José María Segovia de Arana, como Director de la Clínica Puerta de Hierro, de Madrid, ha presentado solicitud de autorización y acreditación para efectuar trasplantes de corazón y corazón-pulmón, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1979, de 27 de octubre; Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, y Orden de 29 de noviembre de 1984.

Por otra parte se ha comprobado que esta Institución reúne los requisitos y condiciones necesarios, según se desprende de los estudios técnicos efectuados por los Servicios del Ministerio de Sanidad y Consumo.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Planificación Sanitaria, y al amparo de la facultad concedida en la disposición final segunda del Decreto 426/1980, de 22 de febrero,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar a la Clínica Puerta de Hierro a efectuar trasplantes de corazón y corazón-pulmón en la forma en que se indica en la Orden de 29 de noviembre de 1984.

Segundo.-De acuerdo con lo que regula la disposición adicional segunda de la Orden de 29 de noviembre de 1984: El Centro Sanitario deberá remitir, semestralmente, los resultados obtenidos en la práctica de los trasplantes cardíacos y/o corazón-pulmón, incluyendo necesariamente la tasa de supervivencia actuarial de los enjertos.

Tercero.-Esta autorización será válida durante un período de cuatro años a partir de la autorización de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», siendo renovable por períodos de tiempo de idéntica duración.

Cuarto.-La Institución Hospitalaria deberá observar cuantas prevenciones están especificadas en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, y en todas las disposiciones complementarias, sometiéndose, en cuanto a su cumplimiento, a todas aquellas especificaciones que del desarrollo de las mismas se deriven.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de junio de 1985.

LLUCH MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de Planificación Sanitaria.

**16749** *ORDEN de 19 de junio de 1985 por la que se autoriza al Centro Médico Nacional «Marqués de Valdecilla», de Santander, a efectuar trasplantes de corazón y corazón-pulmón.*

Ilmo. Sr.: Don Julio Baro Calle, como Director del Centro Médico Nacional «Marqués de Valdecilla», de Santander, ha